

Giorgio Grossi

La opinión pública

Teoría del campo demoscópico

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Víctor Fco. Sampedro Blanco

Esta obra de Giorgio Grossi aborda el estudio de *la opinión pública como la institución y la construcción simbólica central de la democracia*. No es esta una perspectiva que resulte frecuente, menos aún desplegada con el rigor y la erudición del profesor italiano. Quisiera detenerme en este prólogo, primero, en la importancia que reviste el abordaje institucional de la opinión pública. Luego apuntaré algunos debates de fondo que el trabajo de Grossi suscita sobre el papel que esta construcción simbólica e institucional desempeña (o debiera desempeñar) en nuestras democracias.

Abundan quienes confunden la opinión pública con las instituciones que la representan, sin reparar en que, como aquí se afirma, es *la institución* democrática por excelencia. A menudo olvidamos que ella *instituye*, confiere el poder en los regímenes ejercidos en nombre “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Si no lo recordamos a menudo, cabe el riesgo de que acabemos delegando no sólo la representación, sino también el ejercicio de la soberanía popular en quienes dictan los titulares mediáticos, dirigen los centros de encuestas o acaparan los resultados electorales.

Periodistas, encuestadores y políticos conforman la tríada de representantes institucionales con mayor fuerza de la opinión pública. Pero al tiempo que le dan voz la modulan. Traduciéndola llegan incluso a traicionar su sentido. Para empezar, contándola en porcentajes de audiencia o votos, la gestionan convirtiéndolas en cuotas de ingresos económicos y de poder. *Traduttore tradittore*. La máxima precautoria que tanto nos hemos repetido para verter este texto de Grossi al español, quizás debiera iluminar también su lectura. Porque la función última de todo gran tratado de opinión pública, como es este, no es otra que profundizar la democracia, su teoría y su práctica.

Si los comunicadores, los sociólogos y los políticos profesionales disfrazan la representación de sus intereses privados bajo el manto de unas opiniones de (presunto) carácter colectivo (y tienen muchos incentivos para hacerlo), el riesgo de traición al que aludíamos se convierte en amenaza constante. La prensa, los sondeos y las urnas son los medios, nunca los fines, de una democracia que es *deliberativa* o no lo es. Porque la democracia constituye un punto de partida, no de llegada. La definen unos valores y unos procedimientos que aseguran un diálogo social continuo, siempre en puntos suspensivos. De ahí que el ideal democrático nunca llegue a realizarse del todo. Por ello mismo, la deliberación colectiva, a través de la cual todos los actores que buscan el poder quieren arrogarse la opinión pública mayoritaria, carece de punto final. Nadie puede erigirse en representante exclusivo, atemporal y

monopólico de la opinión pública. Por eso, cuando con Grossi la definimos como construcción simbólica, la entendemos en el doble sentido del término *construcción*: como un resultado y un proceso.

La mayoría de los “males” o “malestares” que se imputan a las democracias actuales (al etiquetarlas de forma peyorativa o lastimera como “mediáticas”, “demoscópicas” y “formales”) son fruto de la confusión antes señalada. Parecemos aquejados de una suerte de fetichismo simbólico que conlleva un reduccionismo de la vida cívica y política. En última instancia, esto también *empobrece* nuestras percepciones diarias de la opinión pública, así como las reflexiones e interpretaciones que sobre ella proyectamos.

No reparamos con suficiente intensidad en el carácter de *construcción* simbólica de las cristalizaciones de la opinión pública, cuando toman la forma de titulares, porcentajes demoscópicos y sufragios. Estas cristalizaciones (decantaciones, decimos a veces) hacen visible, siempre de forma parcial y contradictoria, el magma de una deliberación colectiva y constante, mucho más rica en modulaciones y portavoces. Abandonemos, por tanto, la metonimia burda que toma la parte por el todo. En concreto, no confundamos los mecanismos de representación con lo representado. No conviene embobarse en la fascinación por los reflejos de la opinión pública en sus espejos, en lugar de reivindicar el cuerpo que en ellos se proyecta. Ya resulta a veces muy difícil percibir, sentir el “cuerpo social” que habitamos.

El pueblo, que dice gobernarse a sí mismo en democracia, carece de brazos y piernas... Excepto cuando se pone en movimiento. Las movilizaciones y los movimientos ciudadanos pugnan por encarnar otras representaciones de la opinión pública, no del todo institucionalizadas. Lo intentan al margen (en contra y/o a pesar) de las representaciones que proyectan los periodistas, los sociólogos y los políticos profesionales. De hecho, debiéramos recordarles a estos tres sectores profesionales que cobran (les sufragamos) sus salarios por hacer lo que todos, de un modo u otro, realizamos cada día. Con mayor o menor eficacia y fundamento nos informamos y comunicamos sobre los asuntos que consideramos comunes. Intentamos entenderlos desde la razón y los datos, agregamos valores y emociones para, de este modo, decidir cómo gestionamos los recursos propios y colectivos, nuestros planes de vida en sociedad.

Las múltiples caras o voces del pueblo no pueden reducirse a un Jano bifronte que responde “sí” o “no” a una encuesta o lista electoral, alineándose de forma inexorable con el gobierno o la oposición, insertados en líneas editoriales y categorías sociológicas que se presentan como enfrentadas. Pero también es cierto que sin referencia a esas *construcciones* las corrientes de opinión no cobran presencia pública ni impacto político. En realidad, los ciudadanos mantenemos vivo un diálogo colectivo del cual los medios, los sondeos y las urnas debieran considerarse tanto una decantación

provisional como el motor de más debates. Si no fuese así, la democracia habría muerto. Por fortuna, las urnas no siempre validan las ingenierías electorales basadas en el control de los medios y el monitoreo del “mercado” del voto. Las elecciones y las campañas no apagan, sino que alimentan las disputas; eso sí, sólo las dialécticas.

Varias son las tesis que permiten reivindicar la democracia como el mejor sistema de gobierno (y no sólo el menos malo). Consideran a la opinión pública como pilar del poder y como cemento social que aseguran la cohesión; y ello a pesar de ser objeto de disputa permanente. Las tesis democráticas se resumen en que la “batalla por la opinión pública” es (deber ser) incruenta e inclusiva.

La única forma simbólica válida para gobernar reside en arrogarse una representación de la opinión pública compartida socialmente. La violencia, la riqueza, la etnia, los dogmas religiosos o los axiomas ideológicos no legitiman a quien los detenta como representantes públicos; esto es, del interés que se gestiona en nombre y (supuestamente) en favor del pueblo. La democracia evita tener que matar, desposeer o “convertir” (y, si no, quemar en la hoguera) al gobernante que repudiamos y a sus seguidores. Nos basta con criticarles con datos y argumentos lógicos, demostrar en público (ante el público) que han incurrido en la incompetencia o en la mentira. Y, si nuestro compromiso va más allá de la crítica, solicitaremos un voto de castigo que suponga otro voto de confianza, para nosotros o para quien demuestre merecerlo.

Como plus ético (que subraya la dimensión de la democracia como régimen de pedagogía ciudadana y desarrollo cívico), en caso de perder “la batalla”, nos comprometemos a acatar las leyes y a pagar los impuestos. Aunque sean dictados por nuestros antiguos adversarios, aunque desarrollen políticas antagónicas. El cumplimiento de nuestras obligaciones cívicas no nos priva sino que, al contrario, nos legitima para fiscalizarles y criticarles; manifestando, si llega el caso, el carácter antipopular de quien gobierna. Dicha sentencia deberá hacerse según los baremos y mediante los procedimientos que hayan sido establecidos por el pueblo y a través de sus representantes democráticamente elegidos, no según nuestra vara de medir. Porque con demasiada frecuencia transformamos dicha vara en ariete contra nuestros rivales. Sólo quien haya olvidado la sangre (sobre todo, ajena) derramada por los conjurados palaciegos y las nomenklaturas varias de los siglos precedentes (y de la actualidad) podrá menospreciar la paz social de los regímenes que se asientan en la opinión pública.

Lo argumentado hasta aquí implica que la representación de la opinión pública no puede hacerse patrimonializándola, convirtiéndola en patrimonio exclusivo. Nadie puede arrogarse la exclusiva de encarnar la opinión pública en régimen de monopolio: sobre ningún asunto, en ningún periodo o contexto histórico, por excepcional que este sea. El potencial inclusivo de la democracia le permite afrontar los retos del cambio social, ya sean de raíz

demográfica o tecnológica, perviviendo más tiempo como forma de gobierno. Los nuevos ciudadanos pueden ser integrados, los retos derivados del desarrollo científico o económico abordados con normalidad. La democracia es frágil, pero una vez asentada perdura sin hacerse dura, sin perder flexibilidad.

En cambio, las dictaduras y las tiranías mueren por censura e inmovilismo. A falta de abrir la boca para dialogar y denunciar la mentira, se olvidan de respirar, se asfixian... y, al fin, se quedan sin interlocutores. Su legado es, como mínimo, el oprobio del silencio. Así ocurrió en 1989, cuando los ciudadanos de la RDA, tras anunciárseles la posibilidad de cruzar el Muro de Berlín, comenzaron a derribarlo y dejaron a sus gobernantes solos, mudos ante auditorios ya sin audiencia. Pocos silencios más elocuentes y tan vergonzosos como el de Honecker, huyendo de su procesamiento al Chile donde, cuatro décadas antes, se habían refugiado los nazis con idéntico sigilo.

La lectura de la obra de Grossi no debiera sofocar con su erudición estas reflexiones. Máxime cuando no rehuye referirse a procesos contemporáneos de gran calado. Uno de ellos es el posible surgimiento de una “opinión pública internacional”, datado por el profesor italiano en las movilizaciones contra la ocupación en 2004 de Irak. Más allá de la pertinencia histórica del caso, quizás convenga señalar dos retos clave para los regímenes de opinión pública que habitamos: el riesgo fundamentalista y la exclusión del

extranjero. Dos caras de la misma moneda (de uso cada vez más extendido) en el periodismo y la política: el miedo al otro.

La radical defensa del derecho a la diferencia, respecto a las posibles interpretaciones sobre el interés colectivo y de cómo compatibilizarlo con los intereses privados, constituye el mejor antídoto ante cualquier fundamentalismo. Si alguna de las líneas que he escrito antes en elogio de la democracia han parecido ingenuas o incluso cínicas, se debe a que en numerosas ocasiones nuestros gobernantes han sabido embaucar, obviar o invisibilizar al cuerpo social en cuyo nombre decían actuar. Y lo han hecho *en nombre* de las representaciones institucionales de la opinión pública, tras crear mayorías artificiales o marginando los derechos de minorías significativas. De ahí que uno de los lemas de las movilizaciones contra la ocupación de Irak sea “No en mi nombre”.

La invocación constante a la opinión pública es, de hecho, una necesidad inexcusable en todo tipo de régimen político. Porque todo gobernante, incluso el más absolutista, se asienta, al menos, en la aquiescencia de los gobernados. Nos gobiernan porque nos dejamos. La noción de autonomía de la Ilustración lo estableció bien claro. Gobernar consiste en manejar recursos ajenos; por tanto, siempre es a costa de nuestro derecho a autogobernarnos y autodeterminarnos. De ahí la importancia de consensuar y establecer con claridad cómo ejercemos nuestra más completa autonomía, cómo determinamos qué hacemos y quién somos, en clave individual

y colectiva. Los límites de esa autonomía están fijados ya hace tiempo por otra frase común: nuestra libertad acaba donde comienza la del otro. No hay fundamentalismo, incluido el fundamentalismo democrático de la guerra “anticipatoria”, que supere esta prueba.

La diferencia entre el mandatario autócrata y el demócrata reside en que el primero ejerce de padre de la patria o pastor del rebaño de fieles. Decreta la minoría de edad de la ciudadanía y se permite establecer (sin contar con su participación) los fines hacia los que encauzar aquello que no le pertenece. Así dispone (sin barrera ni justificación alguna) de los dineros y posesiones, de los proyectos de vida y hasta de la muerte (en el caso de las guerras) de *sus* gobernados. En democracia la minoría de edad acaba a los 18 años, y en algunas naciones o para otros asuntos, antes. Pero hay excepciones. Una de ellas resulta uno de los retos más acuciantes de nuestras sociedades en términos de representatividad.

Desde su origen ateniense la democracia considera al *meteco* (extranjero) como un ser “apolítico”, carente de la madurez que confiere protagonismo público en la *polis*. Así lo establecen también *todas* las leyes de extranjería actuales. Las opiniones de los inmigrantes no cuentan. Porque apenas se cuentan o son contabilizadas con los números de las audiencias mediáticas, los sondeos preelectorales y, menos aún, los sufragios. De hecho, tampoco importa la opinión de los ciudadanos de otros estados a los que no se les pueden exigir impuestos o enviar al frente de batalla. El

recorte de libertades civiles se atenúa cuando el migrante se nacionaliza, tras contribuir fiscalmente durante varios años con un trabajo “legal”, ligando su destino vital a un “nacional” o alistándose a las fuerzas armadas.

El desprecio o la indiferencia por la opinión pública extranjera explican las dos fracturas a nivel internacional y doméstico que aquejan a nuestras sociedades: el “choque de civilizaciones” y la xenofobia institucional. Los derechos civiles (y hasta humanos) están siendo cercenados por la Guerra antiterrorista global y las leyes de inmigración. Se trata de aplicar un doble rasero a nativos y a forasteros, fuera y dentro de nuestras fronteras. Una doble vara de medir que cada vez se hace más dura porque dichas fronteras resultan más permeables y difusas que nunca. De ahí que el “realismo” geopolítico que prima la fuerza y la violencia en las relaciones internacionales se traspase ahora al extranjero con el que convivimos. No acertó Kant cuando pronosticó la paz perpetua en y entre las democracias. Su tesis en este sentido resulta, más que un futuro histórico, un horizonte de trabajo y lucha social.

Reflexiones de esta índole se exponen en mi libro *Opinión pública y democracia deliberativa* (Sampedro, 2000). El subtítulo avisaba del peligro reduccionista de reducir dicho binomio a *Medios, sondeos y urnas*. La obra de Grossi que presentamos amplía y actualiza, en gran medida y con hondura, la reflexión interdisciplinar que allí se proponía. Son libros complementarios y así lo hemos

hecho notar con varias notas a pie de página, que señalan coincidencias y divergencias. Las primeras abundan más que las segundas.

A lo largo de los tres capítulos iniciales Giorgio Grossi repasa la historia de la opinión pública al hilo de cómo se han transformado sus mecanismos de representación. Considera el papel que le ha adjudicado la filosofía política y atiende a las distintas valoraciones sobre su naturaleza psicosocial. La tensión entre teorías normativas y descriptivas – en cuya selección y evaluación a veces discrepamos - se salda en este libro de Grossi con la presentación de los “modelos” de Walter Lippmann, Jünger Habermas, Niklas Luhmann, Noelle Neumann e Irving Crespi.

El “campo demoscópico”, noción que se toma prestada de Bourdieu pero que se llena de contenido más preciso, podríamos decir que se presenta como “estructurado” y “estructurante”, según los términos de A. Giddens, en el capítulo 4. Esto le permite a Grossi dar cuenta de los “problemas” y “dilemas” que ha venido señalando en las páginas precedentes. Su esfuerzo de conceptualización resulta encomiable, porque identifica con claridad “los elementos constitutivos” y “los canales” del campo demoscópico. Entra así en sintonía con la propuesta basada en referentes teóricos próximos, pero más cercana al *neoinstitucionalismo*, que realicé en mi libro del

2000. Perspectiva que, por fin, es tenida en cuenta en la academia estadounidense que se ocupa de estos temas¹.

El capítulo 5 aborda la concepción de la opinión pública como “resultado procesual y de entidad ambivalente”, que sirve al control (consenso) y a la legitimación (disenso). El proceso de la construcción de la opinión pública (*opinion-building*) se desglosa en “flujos comunicativos, cognitivos y simbólicos (racionales y emotivos, individuales y colectivos, interiores y exteriores)”. Finalmente, Grossi determina las “secuencias” y los “dispositivos” que identifican a los flujos de la opinión pública.

En el sentido del libro, que avanza de la teoría a la concreción empírica, el capítulo sexto y último nos propone cómo “observar, analizar y medir la opinión pública”. La propuesta es tan rica y abierta como la defensa común que realizamos del pluralismo metodológico. *Todas* las metodologías son necesarias (ninguna de ellas, suficiente por sí misma) para estudiar la opinión pública. Si queremos atender a sus muchas manifestaciones, debiéramos considerar desde los dispositivos de representación más clásicos y rudimentarios hasta los más sofisticados. A modo de ejemplo, los lectores en español podrán conocer propuestas de auscultación de la opinión pública, como el sondeo deliberativo de John Fishkin, por

¹ Véase el número especial de *Political Communication*, volumen 23, número 2, 2006, dedicado a *New Institutionalism and the News*.

las que también apostaba mi libro y que se han ensayado recientemente en nuestro país.

La opinión pública como resultado fijo (o prefijado) y no como motor de la democracia, su papel como “protagonista” o como “víctima” de las instituciones que dicen representarla, constituye, creo, la disyuntiva más interesante desplegada por el autor italiano. Tras su estudio, el lector podría atreverse a evaluar, como proponía en mi libro, si las imágenes de la opinión pública que le rodean son fruto de *una competición abierta, plural y competitiva*. O si, al contrario, los profesionales que las gestionan actúan de forma ilegítima. Lo harán si se bunkerizan en sus roles de representación, si posicionan a la ciudadanía de forma monolítica o si le usurpan sus recursos de expresión.

El énfasis que Grossi concede al periodismo y a las Ciencias de la Información, desde su imbricación en las Ciencias Sociales, constituyen otro nexo entre nuestros textos. España e Italia ofrecen en su historia reciente sobrados ejemplos del daño que ocasiona el férreo control de los medios de comunicación, ligados a un poder político que, entonces, se sabe impune... Entonces la ciudadanía también se sabe casi inerme, sin poder. La proximidad de nuestras esferas públicas del Sur de Europa y la alusión a casos prácticos eran una razón adicional para esta traducción. En otros países de mayor tradición democrática también existen monopolios ilegítimos, pero allí se denuncian más a menudo, con más contundencia y con

mayores consecuencias. Una concepción de la opinión pública menos reduccionista, más dialógica, plural y dinámica, como la que defendemos, ayuda a ello.

De ahí la necesidad de repetir aquí el último párrafo de Grossi: “la centralidad y el rol de la opinión pública en una sociedad democrática futura no dependerán tanto del hecho de que esta sea reconocida y consultada (tal vez incluso continuamente), sino de que tenga como objeto del propio opinar (y actuar) la política *en sí misma*; es decir, conservando la forma histórica y el valor que adquirió en la modernidad, como instrumento para la emancipación individual y colectiva a través de un conjunto de derechos e ideales que nunca más debieran ser conculcados”.

Prefacio

Uno, nessuno, centomila
Luigi Pirandello, 1926

Escribir un libro sobre la opinión pública puede parecer un exceso de ambición o ingenuidad, una elección arriesgada o demodé. Sin embargo, en los umbrales del siglo XXI, aún es útil reafirmar el principio según el cual cada fenómeno o dimensión de la realidad social – también lo que parece más huidizo o impalpable – puede y debe ser analizado e interpretado con las herramientas de la razón, de la investigación y de la perspectiva científica.

En este sentido, aquel producto típico de la modernidad y de la democracia que es la opinión pública, ha sufrido durante demasiado tiempo, sobre todo en Italia, una escasa atención, una marcada subestimación, un vago matiz al que se alude en los discursos colectivos. Y eso, paradójicamente en un periodo histórico – los últimos veinte años – durante los cuales se ha concedido un continuo y rápido aumento de la importancia de las dinámicas de opinión en cada sector de la vida social, nacional e internacional.

Reabrir la reflexión y la discusión sobre tal fenómeno se convierte en el objetivo casi más relevante de los modelos, de las teorías y de los análisis que serán presentados y argumentados en

estas páginas. En un cambio histórico frente al cual ya nos interrogamos cotidianamente sobre los destinos de la democracia en un mundo globalizado, intentar reflexionar sobre uno de los pilares constitutivos – la *public opinion* – se convierte en algo no sólo importante sino indispensable. A no ser que no se considere ya concluida (y enterrada) la idea de modernidad y de democracia, que consideraba la libertad de expresión de las opiniones un fundamento no sólo de igualdad sino de tolerancia y de emancipación de mujeres y hombres.

Dos breves y sinceros agradecimientos. A Paolo Ceri, que ha creído en este proyecto y lo ha seguido y apoyado pacientemente. Y a Giacomo Sani, que ha leído una primera redacción del borrador, aportando como siempre puntuales y útiles observaciones que me han permitido mejorarlo.

G.G.

Milán, 23 mayo 2004

ADVERTENCIA

Las citas contenidas en el texto, extraídas de otros textos en lengua extranjera, están traducidas por el autor. Las palabras situadas entre corchetes son anotaciones insertadas por el propio autor para mejorar la comprensión. En las citas, los tres puntos suspensivos indican que han sido omitidas algunas palabras dentro de la frase, mientras que los tres puntos entre corchetes señalan que han sido suprimidos párrafos enteros.

1.

Introducción.

¿El siglo XX como siglo de la opinión pública?

Quizás jamás hubo un periodo histórico – por lo menos en el «mundo occidental»² – donde la opinión pública tuviese tal importancia y difusión como a lo largo del siglo XX. Desde luego, nunca como en la segunda mitad del siglo XX, la vida política y social de toda la comunidad – nacional e internacional – tuvo tanta visibilidad, relevancia e influencia (positiva y negativa) a través de las formas y dinámicas de la opinión pública: esa particular sedimentación cognitiva y simbólica de las orientaciones, de las

² Este trabajo hace referencia únicamente a la tradición del «mundo occidental», en su conformación predominante de sociedad industrial, con sistema capitalista y democracia representativa.

actitudes y de las voluntades individuales-colectivas que se manifiesta en la esfera pública y social.

La importancia y visibilidad de la opinión pública empezó a concretarse y a cobrar significado durante los dos conflictos mundiales y el posterior enfrentamiento ideológico entre Estados, sistemas sociales y sectores de influencia. Por lo tanto, desde los años Veinte hasta los años Cincuenta del siglo pasado, la opinión pública se convirtió en un tema más central y cada vez más influyente. Durante los años Sesenta y Setenta prevalecieron las continuas invocaciones a la opinión pública, se materializaron en el uso cotidiano de los sondeos y de los estudios de mercado, relacionados con las encuestas sobre motivaciones y actitudes en muestras representativas de la población, y que al final han adoptaron las características de una verdadera difusión capilar con el pleno desarrollo de arenas mediáticas nacionales y globalizadas. En los años Ochenta y Noventa, encontramos un contexto de sociedad post industrial madura, cada vez más dirigido a invocar la *democracia*, tanto a través de la *videocracia* como de la *sondeocracia*.

Por lo tanto, no es paradójico considerar el S. XX no sólo como el «siglo breve», el «siglo del trabajo» o el «siglo de la ideología» – por recordar algunas de las metáforas interpretativas más notorias– sino también como el «siglo de la opinión pública». De hecho, es precisamente al final de este segundo milenio, que una de las características fundamentales de la modernidad – la opinión pública considerada como elemento relevante de las

relaciones sociales en una sociedad democrática, globalizada e individualizada al mismo tiempo – no sólo ha alcanzado su nivel máximo de desarrollo (por frecuencia de uso e importancia colectiva) sino también su plena legitimación. La opinión pública está considerada, no como un «fantasma», un «simulacro», o una «metáfora», sino como una construcción simbólica «material», una «casi-institución». Un fenómeno y un proceso fundamentales para comprender las dinámicas colectivas que atañen a las relaciones de poder en la sociedad, la participación social y cultural, las necesidades individuales y los impulsos populares de la «sociedad abierta», las reglas democráticas y la responsabilidad del gobierno y de la acción política.

En este sentido, se podría recorrer y jalonar el siglo pasado a través una serie de eventos, episodios y casos de estudio que justamente demuestran esta progresiva ascensión de la opinión pública desde los márgenes de la sociedad y de las vivencias individuales, hasta ocupar el centro de los procesos simbólicos y de decisión que gobiernan y estructuran nuestra vida cotidiana a escala nacional e internacional. Tanto en situaciones de consenso como de conflicto, tanto desde una perspectiva participativa como de manipulación. De hecho, aunque el nacimiento de la opinión pública en su acepción contemporánea data por lo menos el siglo XVIII, es sólo durante el XX cuando toma su actual configuración: una entidad política inmaterial que atañe a toda la colectividad, que se alimenta en su mayoría con «publicidad mediada», un espacio público difundido y construido, sobretodo, por los medios

de comunicación de masas. Una opinión pública que es continuamente recabada y analizada mediante técnicas de encuesta empíricas de carácter estadístico (*survey* y sondeos) y representa, casi cotidianamente, el punto de referencia de toda legitimación democrática, más allá del mero momento electoral.³

Si la nuestra es realmente una «democracia del público», basada en la «prueba de la discusión» (Cotta *et al.* 2002), la opinión pública constituye normativamente el *mismo sentido de la democracia*: no sólo como lugar de representación sino también de participación, no sólo como ámbito de decisión sino también de discusión y enfrentamiento.

Como veremos en el curso de este libro, las transformaciones de la sociedad democrática han supuesto una mutación del carácter

³ La creciente primacía de la opinión pública como punto de referencia legítimo (y legitimante) de la democracia se debe también, entre otras razones, a la progresiva caída del grado de participación en las elecciones políticas. Aunque todos (o casi todos) expresen opiniones y preferencias políticas en los sondeos, sólo dos tercios (o como máximo tres cuartos) de la población acude a las urnas a votar. Con ocasión de las elecciones de 1995 en Italia, el líder del centro-derecha Berlusconi declaró que el verdadero resultado de las elecciones era lo que habían predecido los sondeos pre-electorales (pronosticando la victoria de su coalición) y no el resultado salido de las urnas, favorable al centro-izquierda. Véase a propósito lo que afirma un acreditado politólogo como Verba (1996), que ha destacado cómo los sondeos elaborados con muestras representativas de la población son más democráticos e igualitarios que las propias convocatorias electorales, minadas por el abstencionismo y por lo tanto «autoselectivas» (Verba cit. en Barisione y Mannheim 1999).

y del rol de la opinión pública. Observando el S. XX a través de la lente o la perspectiva de las dinámicas de opinión, constatamos esta continua conexión entre el ámbito de la política, el de la democracia, el espacio de la sociabilidad y el de la esfera pública, y, por fin, el campo de circulación de orientaciones y opiniones de interés individual y colectivo. En primer lugar, consideramos las estrategias de propaganda practicadas por los Estados-nación en las dos guerras mundiales, el papel desempeñado por la manipulación del consenso en los regímenes totalitarios (fascismo, nazismo, estalinismo⁴) a través del uso retórico y persuasivo de los medios de comunicación de masa y el impacto de la publicidad en el mercado de consumo de los años Cincuenta, hasta el empleo masivo de los sondeos de opinión como nueva manera de dirigir la campaña electoral de la segunda modernidad⁵ (años Sesenta y Setenta). Después, en los años Ochenta en Estados Unidos y en los años Noventa en Europa, encontramos la *permanent campaign* como nuevo modo de gobernanza en las sociedades democráticas, con el uso cotidiano de la opinión pública no sólo como legitimación sino como verdadera «palanca de gobierno»⁶. En este

⁴ Sobre la importancia de la propaganda a través de los medios de comunicación en los regímenes totalitarios véase Marletti (2002).

⁵ Véase la notable división triple de los modelos de campaña electoral en Norris (1997).

⁶ Sobre las estrategias de «campaña permanente», de *going public* y del uso de los sondeos como herramienta de soporte político en los actos del presidente norte-americano, véase Roncarolo (1994).

sentido, podríamos releer las grandes etapas de la historia mundial y desentrañar la evolución de la democracia – representativa, neopopulista o «electrónica» - identificando y la reconstruyendo el papel desempeñado por la opinión pública en la interpretación y, si puede ser, en la explicación no sólo de los fenómenos y procesos sociales, sino también del valor añadido que las dinámicas de opinión han producido tanto para la sociedad en general como para los individuos que en ella operan y se reconocen.

Sin embargo, esta perspectiva ha tenido y sigue teniendo dificultades para concretarse en un ámbito disciplinar autónomo y legítimo, estudiando la opinión pública como fenómeno social constitutivo tanto de la modernidad como de la democracia. Todos aquellos que, en el curso del siglo pasado han intentado iniciar una reflexión sistemática, específica y exhaustiva de la opinión pública como concepto y como proceso, a menudo han tenido que enfrentarse no sólo a una realidad siempre más compleja y dinámica sino también a una serie de estereotipos, tópicos y atajos cognitivos que han caracterizado la manera con la cual los observadores, peritos y también políticos y periodistas han hablado de la opinión pública y han glorificado su rol y su función.

Para introducir el discurso sobre la opinión pública en calidad de dispositivo central de la democracia contemporánea, como se presenta durante el siglo pasado, puede ser útil partir en concreto de alguno de los sucesos ejemplares y casos significativos que nos muestran una representación diacrónica de la estructura y la evolución de este fenómeno. Desde el final del siglo XIX hasta el

comienzo del XXI, podemos reconstruir – en la sociedad occidental – una especie de *histoire événementielle* de la opinión pública. Esta perspectiva nos ilustra y desvela la imbricación cada vez más relevante y compleja entre espacio público democrático y esfera pública de la opinión: una relación que con demasiada frecuencia, debido a su creciente difusión, acaba siendo dada por descontada o ritualizada, sin generar en cambio la conciencia de que el intento de desmontarla y explicarla supone también comprender algo más sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos.

Para dar comienzo a esta rápida periodización del «siglo de la opinión pública» podemos empezar por un episodio judicial que apasionó la Francia de los últimos años del siglo XIX: la publicación del artículo de Émile Zola *J'accuse* en el diario «Aurore» (1898) en relación al conocido caso Dreyfus. Podemos decir que se trata, por un lado, del primer ejemplo de campaña de opinión pública promovida mediante la prensa por un intelectual (el escritor como intelectual concienciado y como *opinion leader*), y por otro, considerando el gran eco y el impacto social y político que tuvo la denuncia realizada por Zola, de uno de los primeros casos de «victoria» de la opinión pública sobre el poder político en una sociedad de masa.

El proceso, la condena y la degradación de Alfred Dreyfus⁷ constituyen, uno de los primeros episodios de movilización de la opinión pública en Francia a partir de la prensa sobre un supuesto caso de traición al honor militar: podemos encontrar «en este proceso todos los ingredientes de una lucha política utilizando los medios de comunicación y haciendo un llamamiento a la opinión pública de todo el país» (Lazar 1995, p.21). El artículo del intelectual-escriptor Zola activó el «tribunal de la opinión pública» para denunciar las maniobras y los intereses del Estado Mayor militar que habían elegido un chivo expiatorio (de origen judío)⁸.

El caso Dreyfus parece por lo tanto un ejemplo asombroso de movilización de la opinión pública y de campañas de opinión en el sentido moderno del término, con todas las consecuencias en el terreno de la lucha política, ideológica y cultural que implica y compromete toda la población entera. Pero muestra ya lo que

⁷ Capitán del ejército francés de origen judío que estuvo en el centro de un sonado proceso por espionaje a favor de Alemania, con la consiguiente degradación que tuvo lugar en público según un ritual militar particularmente humillante (1894). Pero la campaña de inocencia iniciada por Zola en la prensa condujo a la concesión de la gracia (1899) y luego a la rehabilitación (1906) del mismo Dreyfus.

⁸ A este propósito, Zola escribió: «yo acuso a los cargos militares de haber conducido en la prensa ...una campaña abominable, para desviar y encubrir sus errores [...]. El acto que yo cumpla aquí no es más que un medio revolucionario para acelerar la explosión de la verdad y la justicia» (Zola citado en Lazar 1995, p. 21).

Tarde estaba teorizando justamente en esos años⁹: la prensa es la que «crea» el público y la opinión pública, nacionaliza e internacionaliza el «espíritu público», descubre y hace surgir las opiniones individuales, porque en las sociedades contemporáneas son los periódicos quienes orientan y modelan la opinión «imponiendo a los discursos y a las conversaciones la mayor parte de sus temas cotidianos» (Tarde 1989, p.81).

Eso ocurre también porque la opinión pública comienza a hacer referencia a toda la población, y no únicamente a los públicos reducidos y cultos. La sociedad de masa, exige una opinión pública «de masa», que en consecuencia se dispone a ser tanto autoregida (en el seno de los discursos cotidianos) como heteroregida (a través de la exposición por parte de la prensa). Influye pero también es influida, se activa sola pero puede ser activada, toma conciencia política y sentido de orientación de opinión porque la prensa (o una parte de ella) la lleva a hacerlo¹⁰.

Por un lado, la opinión pública – por medio de la prensa – se vuelve en potencia un *tribunal permanente*: es posible dirigirse a

⁹ En 1901 se publica el libro *L'opinion et la foule* de Gabriel Tarde, obra fundamental de quien es considerado el fundador de la ciencia de la opinión pública contemporánea.

¹⁰ Observa a este propósito Privitera (2001, p.XIII) que «lo que muestra el caso Dreyfus es que la esfera pública, aunque no excluya la dimensión psicológica, es fundamentalmente un fenómeno de carácter cognitivo». Tal proceso, por lo tanto, puede ocurrir también a través de la lectura y no necesita la co-presencia espacio-temporal con el evento en cuestión.

ella para cualquier tema de interés colectivo (jurídico, moral, social) si se quieren denunciar distorsiones, errores e ineficiencias del poder político. Sin embargo, resulta también un terreno expuesto cada vez más a la manipulación para obtener el consenso y la adhesión masiva al Estado (como ocurrirá pocos años más tarde con el estallido de la Primera Guerra Mundial).

En 1936, en pleno New Deal, justo antes de las elecciones presidenciales americanas donde competían el presidente saliente Roosevelt y su competidor republicano Alfred M. Landon, un joven investigador, George Gallup¹¹, lanzó un desafío a la famosa revista «Literary Digest», que hacía años realizaba «encuestas» preelectorales entre sus lectores. Impugnando la metodología inconsistente y no científica de estas «pseudo-encuestas», Gallup, ante la incredulidad general, aseguraba con algunos meses de antelación que la «Literary Digest» pronosticaría la victoria de Landon (como efectivamente hizo la revista), mientras predijo una reelección de Roosevelt con el 55% de los votos. El resultado final de las votaciones dio la razón a Gallup, que desde aquel momento

¹¹ Gallup, como sus colegas Roper y Crossley, provenía del campo de los estudios de mercado y quería transferir técnicas estadísticas de muestreo, a la medición de la opinión pública. Hasta entonces en Estados Unidos dominaban los llamados *straw polls* (sondeos de paja) que eran además promovidos por la prensa entre los propios lectores: se trataba de «pseudo-sondeos» puesto que quien contestaba – generalmente por correo – no constituía una muestra ni representativa ni aleatoria de la población (Barisione y Mannheim 1999).

se convirtió en el padre fundador de la investigación empírica sobre opinión pública en los Estados Unidos, mientras que la «Literary Digest» fue obligada a cerrar para siempre.

Por eso, en 1935, Gallup funda el American Institute of Public Opinión. En 1936 se consagran públicamente las técnicas de muestreo con la realización de *sampling referendum*¹², y en 1937, nace la revista «Public Opinion Quarterly». Tras estos hechos, el análisis de la opinión pública a través de la observación estadística de las orientaciones de opinión mediante sondeos representa una piedra angular no sólo en los estudios demoscópicos, sino también en la relación entre democracia, participación política y dinámicas de opinión. Si la «ciencia de la opinión» nace con Tarde, la «medición y la encuesta de opinión» se define y desarrolla con Gallup.

A pesar de que ya en aquellos años, también en Estados Unidos, se hubiesen levantado críticas y dudas sobre la equivalencia *sondeos de opinión = análisis de la opinión pública* (de hecho, impulsada por las encuestas de muestreo) el viraje introducido por Gallup fue aún más relevante y decisivo de lo que pudiera parecer a primera vista. Nacía la que será llamada la teoría populista de la opinión pública – en alguna medida, hija del

¹² Es el término usado por Gallup para indicar que se trataba de revelaciones de las orientaciones políticas de los ciudadanos («una elección nacional en escala reducida», como había titulado el «Washington Post» en 1936) y no solamente de «sondeos de opinión», como los entendemos hoy en día.

mismo *New Deal* (Amoretti 1997) –, para la cual el sondeo se convierte en su herramienta principal¹³.

La opinión pública parecía así el conjunto, la suma de todas las opiniones individuales. La encuesta de estas opiniones garantizaba la participación democrática de todos los ciudadanos sobre la reedición del conocido principio: no sólo *one man, one vote*; sino también, *one opinion*. Además, como agudamente ha hecho notar Fishkin (1995)¹⁴, Gallup había dado también respuesta a la profecía negativa de Bryce¹⁵ – politólogo europeo observador crítico de la democracia americana como Tocqueville – que temía la evolución del *government by public opinion*, típico de una democracia representativa, hacia un nuevo tipo de gobierno caracterizado por el *rule of public opinion*; en el cual, «la opinión pública hubiera no sólo reinado, sino también gobernado» (Bryce cit. en Fishkin 1995, p.74).

¹³ «la opinión pública cree en el valor de la contribución de cada individuo a la vida política, y en el derecho de los seres humanos comunes de llevar la voz en la determinación de su propio destino. La opinión pública, en este sentido, es el pulso de la democracia» (Gallup y Rae 1968, p.8).

¹⁴ James S. Fishkin, politólogo americano, está entre los defensores y promotores de los «sondeos deliberativos», un nuevo método de encuesta de opinión pública, a través de la organización de momentos de reflexión y discusión colectiva antes de expresar una opinión sobre un tema (véase el Cap. 6).

¹⁵ Esta profecía se encuentra en el libro *The American Commonwealth*, 1888, un volumen menos conocido de la obra maestra de Tocqueville sobre la democracia en América, pero bastante influyente en los estudiosos estadounidenses de opinión pública.

Gallup, por tanto, hace posible la superación de este obstáculo a través de la unión de metodologías estadísticas altamente fiables, con un populismo democrático tan ingenuo como enraizado en la tradición norteamericana¹⁶.

Casi cuarenta años después, en 1972, pocos meses antes de la reelección de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos y, por tanto, en plena campaña electoral, dos periodistas del diario «Washington Post» - Carl Bernstein y Bob Woodward – comenzaron, con una serie de artículos de denuncia, lo que se convertiría en 1973 en el «escándalo Watergate» y que llevó al *impeachment* del presidente y a su consiguiente dimisión¹⁷. El episodio, del todo extraordinario por las consecuencias que produjo, ha sido objeto de análisis y reflexiones desde múltiples puntos de vista. En realidad, como han subrayado Engel y Lang

¹⁶ Es famosa la leyenda del presidente George Washington que amaba recorrer el país a caballo para escuchar las opiniones de cada ciudadano con el fin de recabar indicaciones para su acción de gobierno (véase Geer 1996).

¹⁷ El escándalo nace del hallazgo de micrófonos ocultos en la sede central de la junta electoral del Partido Demócrata. La investigación revelará una serie de actos ilegítimos llevados a cabo por los republicanos y el jefe del equipo de Nixon durante la campaña de reelección: allanamiento de la sede electoral de los Demócratas para colocar micrófonos ocultos y espiar así las estrategias electorales; uso de fondos electorales para espionaje y sabotaje; reciclaje de donaciones y suscripciones en Méjico, corrupción, etc.

(1983) en su famosa investigación¹⁸, el Watergate fue un clásico ejemplo de «batalla por la opinión pública», en la cual los medios, los actores políticos, las instituciones parlamentarias y los ciudadanos norte-americanos intentaron movilizar el consenso de la colectividad a favor o en contra del mismo presidente.

El episodio fue particularmente asombroso no sólo por su resultado final – un presidente obligado a dimitir bajo la presión tanto del establishment, como de la opinión pública – sino también por cómo se había llegado a resultado imprevisto. Dicho acontecimiento fue posible porque se desarrolló un proceso de construcción de la opinión pública en el cual contribuyeron distintos actores – desde los medios y los sondeos, hasta los mismos actores políticos – creando un cambio progresivo del «clima de opinión», que en pocos meses llevó a que Nixon perdiese (no sólo en el terreno legal, sino sobretodo en el político) el consenso de la mayoría de los ciudadanos, tanto demócratas como republicanos.

El escándalo Watergate evidencia algunos elementos novedosos sobre la formación de la opinión pública y su articulación. El primero de estos es el papel desempeñado por los medios como sujetos capaces de contribuir al proceso de *agenda building* (Engel y Lang 1983) que consiste en seleccionar temas e issues para ponerlos en la atención colectiva (la agenda pública), y

¹⁸ Publicada en el volumen *The battle for public opinion. The president, the press and the polls during Watergate*.

en definir los grados de relevancia y prominencia atribuidos a ciertos issues. El segundo concierne a la importancia del «clima de opinión» en la activación y construcción de la misma opinión pública. Por ejemplo, la relación vinculante que existe en semiótica entre texto y contexto se puede encontrar en nuestro ámbito en la relación entre orientaciones de opinión y «clima de opinión»: las primeras adquieren pleno significado sólo en relación al segundo y, por eso, la opinión pública es un fenómeno más complejo que la simple suma o manifestación de opiniones individuales.

En julio del 1994, en Italia, el nuevo gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi, recién salido de una abrumadora victoria electoral en primavera – con el sistema mayoritario recién implantado – decidió promulgar un decreto sobre la limitación de la prisión preventiva (llamado decreto Biondi, por el nombre del ministro competente). Tal decreto, con el pretexto de reducir la congestión penitenciaria, fue interpretado por la oposición como destinado a limitar el uso que la magistratura hacía de tal herramienta en las investigaciones sobre la corrupción de políticos y empresarios. Dichas investigaciones, bautizadas «Manos Limpias», habían sido iniciadas por el *pool* del Tribunal de Milán en 1992.

El gobierno Berlusconi había encargado a un instituto de encuestas de confianza un sondeo para evaluar la orientación de los italianos sobre el tema, antes de promulgar el decreto. Este

sondeo había dado un resultado más bien claro: el 74% de los encuestados se declaraba favorable a la limitación de la prisión preventiva.

Sin embargo, con la noticia de la promulgación del decreto, se registraron reacciones negativas muy extendidas e inmediatas en todo el país. No sólo de la oposición de centro-izquierda, sino sobretudo por parte del grupo de magistrados de Milán que amenazaban con dimitir, y por manifestaciones espontáneas de protesta popular, desfiles, sentadas y avalanchas de faxes a favor de la magistratura. El decreto Biondi fue bautizado inmediatamente como el decreto «salva ladrones», y las imágenes de algunos políticos destacados en los telediarios, justo después haber obtenido la excarcelación, alimentaron aún más aquella «revuelta de dignidad» que parecía abarcar a amplios estratos de ciudadanos, más allá de sus posiciones políticas.

La reacción conjunta de la magistratura de Milán, de sectores de la prensa, y de un vasto estrato de la población obligó al gobierno a retirar el decreto pocos días después.

Este episodio representó un caso significativo de cómo la opinión pública impactaba en la lucha política italiana y, sobretudo, arrojó luz sobre el creciente rol de los sondeos como delicada herramienta de legitimación/deslegitimación de las decisiones políticas. Sin embargo, más que el uso rutinario del sondeo como soporte para la acción política – o como verificación previa del consenso – resulta quizás más interesante analizar la relación entre las dinámicas de opinión, las distintas características

de las opiniones implicadas y el «clima de opinión», evidenciadas en este caso.

La opinión pública no es sólo el equivalente de las opiniones mayoritarias presentes en la población, sino que también depende de la intensidad y de la fuerza con la que dichas opiniones son sostenidas (y eventualmente movilizadas) por parte de quien las expresa y comparte. La opinión pública es el resultado de un proceso más amplio del cual una parte importante está constituida también por minorías activas (los magistrados, los grupos militantes, los ciudadanos más informados y concienciados) que pueden re-orientar las dinámicas de opinión en calidad de portadoras de «opiniones profundas» (provocadas por sentimientos y que incitan a la acción) mucho más sentidas y enraizadas que las simples «opiniones encuestadas» mostradas en los sondeos (Ceri 1994).

Además, para el proceso de construcción de la opinión pública, más allá del papel desempeñado por los medios para evidenciar y defender tales manifestaciones, y para amplificar (y legitimar) tales posiciones ante el juicio de toda la comunidad, pareció resultar decisivo, una vez más, el «clima de opinión» presente en aquel momento en la sociedad. Sin este, tales opiniones «profundas» no hubieran podido generalizarse y recabar el consenso. De hecho, el clima de opinión dominante en aquellos años en Italia era indiscutiblemente favorable al rol de la magistratura, a su intento (también lleno de errores y extralimitaciones) de restituir transparencia y dignidad moral a la

acción de los partidos y de los cargos públicos. Todo ello después de una fase de involución y crisis en la gestión del estado¹⁹.

A comienzo del 2003, el inicio del plan de «guerra preventiva» contra el Irak de Saddam Hussein, lanzado por Bush y sus aliados, provocó sobretodo en Europa una reacción intensa y extensiva de las distintas opiniones públicas nacionales. Se trataba no sólo de orientaciones de opinión – ampliamente registradas por los sondeos²⁰ – sino también de manifestaciones de protesta, de marchas a favor de la paz, de formas explícitas de disenso como aquellas difusamente presentes en Italia, expresadas a través de la exposición de banderas a favor de la paz en las ventanas de las casas, oficinas, empresas y edificios públicos. Se habla incluso de una contraposición entre los dos nuevos poderes globales: por un lado Bush, presidente de la única superpotencia, y por otro lado la Opinión Pública Mundial²¹.

Incluso si tal movilización de las opiniones públicas europeas podía depender de distintos factores y diversas motivaciones –

¹⁹ En 2002-3, en un diferente clima de opinión, menos favorable a la magistratura y también menos generalizado y transversal, el gobierno de centro-derecha de Berlusconi pudo promulgar leyes y decretos igualmente contestados para limitar la acción de la magistratura. En ellos no encontró una reacción significativa por parte de la opinión pública italiana.

²⁰ Véase, no sólo en lo que concierne a Italia, los datos y el análisis presentes en Mannheimer (2003).

²¹ Fue el «New York Times» quien acuñó esta metáfora y nueva etiqueta para identificar una opinión pública globalizada.

rechazo de una intervención bélica sin el aval de la ONU, dudas sobre la efectiva amenaza de las «armas de destrucción masiva» de Saddam Hussein, disenso sobre la nueva teoría de la «guerra preventiva», rechazo de la guerra como herramienta de lucha al terrorismo o pacifismo (también de carácter religioso) - jamás en Europa se había registrado semejante movimiento de opinión colectiva contra un evento en el cual ninguno de los Estados europeos (salvo Gran Bretaña), resultaba de hecho directamente implicado.

A pesar de todo, el 20 de Marzo 2003 empezaron las operaciones bélicas y la guerra llevó a la caída del régimen de Saddam Hussein y a la ocupación militar de Irak, a la espera de la reconstrucción democrática del país.

El episodio – asombroso por el impacto que generó a nivel mundial – parece aún más interesante a la luz del rol que cobraron las dinámicas de opinión en el seno del mundo occidental y de las sociedades democráticas. El primer elemento que hay que subrayar es que no siempre la opinión pública consigue condicionar las elecciones de los líderes y de los gobiernos, y que al contrario, a veces los Jefes de Estado están dispuestos a sacrificar su popularidad y consenso para materializar una decisión política²². A

²² Resulta evidente que estas orientaciones críticas de las ciudadanía desempeñaron un papel de freno y de condicionamiento para algunos líderes europeos más filoamericanos – Berlusconi y Aznar – obligándolos a apoyar la intervención militar americana sin comprometer directamente a sus respectivos países en la guerra de campo. Sin embargo, es también cierto que en el caso de

diferencia de otros episodios citados antes, la opinión pública – también globalizada – no parece haber influido de manera determinante en las decisiones políticas y, por eso, el paradigma de la «sondeocracia» parece haber sufrido un inesperado desmentido.

Por otra parte, una segunda consideración haría referencia a las consecuencias que semejante «no alineamiento» entre líderes y colectividad podría generar en las sociedades democráticas. De hecho, parece evidente que la relación entre los gobiernos y las dinámicas de opinión se convierte en algo siempre más instrumental y menos normativo. Tener en consideración o no el consenso popular no depende de una concepción «dialéctica» o contractualista de la relación entre gobernantes y gobernados; según la cual cada decisión, convergente o divergente, se toma *tras* discutirla con la opinión pública. Más bien se trata de una visión táctica y funcional de «lo que está en juego» y que interesa a los líderes en un momento determinado. Eso no significa que el liderazgo pueda prescindir del favor de la opinión pública, como demuestra la gran inversión en discursos y exhortaciones públicas con elevado contenido simbólico y de valor, que promovieron la pareja Bush-Blair y sus aliados para intentar re-orientar la opinión nacional e internacional en los meses anteriores al estallido de la guerra. Indica más bien que tal necesidad no siempre es

Blair, el riesgo de impopularidad no frenó al primer ministro inglés a participar directamente en las acciones militares.

vinculante. Así, la democracia neopopulista puede convertirse en «elitista», y el rol de la opinión pública no está siempre definido.

En el caso Watergate, la «batalla de la opinión pública» fue perdida por el liderazgo político; en cambio, en la guerra contra Saddam ha salido derrotada la ciudadanía. Sin embargo, la centralidad de la opinión pública no nace de su «invencibilidad» - como señalaban enfáticamente los primeros teóricos ilustrados - sino de su capacidad para condicionar y controlar el proceso de gobierno en las sociedades democráticas. Sociedades cada vez más caracterizadas, no tanto por la esclavitud respecto a los sondeos de opinión, sino más bien por el déficit del rol de la opinión pública como factor decisivo y determinante de la calidad de la democracia y la responsabilidad de gobierno.